

JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEEM-JIN-074/2015.

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL 10 ELECTORAL MORELIA NOROESTE.

TERCERO INTERESADO: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

MAGISTRADO PONENTE: OMERO VALDOVINOS MERCADO.

SECRETARIO INSTRUCTOR Y PROYECTISTA: JOSUÉ ROMERO MENA.

Morelia, Michoacán, a cinco de agosto de dos mil quince.

VISTOS, para resolver, los autos del juicio de inconformidad identificado al rubro, promovido por Julio César Pichardo Valdés, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Comité Distrital 10 Electoral Morelia Noroeste del Instituto Electoral, residente en esta ciudad, en contra del acta pormenorizada del conteo, sellado y enfajillado de las boletas electorales, los resultados del cómputo distrital en cuanto a la elección de Gobernador del Estado dentro del Distrito Electoral 10 Morelia, Noroeste, con sede en esta capital, y la declaración de validez de la misma; y,

R E S U L T A N D O :

PRIMERO. Antecedentes. De la narración de hechos que el instituto político actor realiza en su demanda, así como de las constancias de autos, se advierte lo siguiente:

I. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince, se celebró la jornada electoral en el Estado de Michoacán, para la elección de Gobernador del Estado de Michoacán.

II. Cómputo distrital. El diez de junio siguiente, dio inicio la sesión del Consejo Distrital 10 Electoral, con sede en Morelia (Noroeste), Michoacán, para la realización del cómputo de la elección de Gobernador.

En el acta que se elaboró con motivo de la sesión del Consejo Distrital se asentaron los siguientes resultados:

Votos obtenidos por los Partidos Políticos.		Con Número.	Con Letra.
	PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	17,729	DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE
	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	15,139	QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE
	PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	17,318	DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO
	PARTIDO DEL TRABAJO	1,595	MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
		1,603	MIL SEISCIENTOS TRES

	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO		
	PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO	2,577	DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
	PARTIDO NUEVA ALIANZA	765	SETECIENTOS SESENTA Y CINCO
	MORENA	3,228	TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO
	PARTIDO HUMANISTA	1,705	MIL SETECIENTOS CINCO
RESULTADOS DE CANDIDATO COMÚN.		Con Número.	Con Letra.
	CANDIDATURA COMÚN PRI/VERDE	492	CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
	CANDIDATURA COMÚN PRD/PT/NUEVA ALIANZA	218	DOSCIENTOS DIECIOCHO
	CANDIDATURA COMÚN PRD/PT	490	CUATROCIENTOS NOVENTA
	CANDIDATURA COMÚN PRD/NUEVA ALIANZA	100	CIEN
		22	VEINTIDÓS

	CANDIDATURA COMÚN PT/NUEVA ALIANZA		
CANDIDATOS NO REGISTRADOS		209	DOSCIENTOS NUEVE
VOTOS NULOS		3,706	TRES MIL SETECIENTOS SEIS
VOTACIÓN TOTAL DEL DISTRITO		66,896	SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

III. Juicio de inconformidad. El quince de junio del presente año, el Partido Político Revolucionario Institucional, por conducto de su representante **suplente**, ante el órgano electoral responsable, promovió juicio de inconformidad en contra del acta de sesión especial permanente de computo municipal, pormenorizada del conteo, sellado y enfajillado de las boletas electorales, la elección de Gobernador dentro del **Distrito Electoral 10 Morelia, Noroeste** y, la declaración de validez de dicha elección, actos atribuidos al Consejo Distrital del citado municipio (foja 4 a la 19).

IV. Tercero interesado. El Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante propietario ante el Comité **Distrital 10 de Morelia Noroeste** del Instituto Electoral, residente en **esta ciudad**, con el carácter de tercero interesado, compareció al presente juicio de inconformidad.

1. Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación del tercero interesado **Partido de la Revolución Democrática**, por conducto de su representante propietario ante el Consejo **Distrital 10 Morelia Noroeste**, con sede en

esta ciudad, pues en términos del artículo 13, fracción III, de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, tienen un derecho incompatible con el de la parte actora en el presente juicio, en tanto que su pretensión es que no prosperen los agravios expresados, así como que se confirmen los actos impugnados, tan es así, que hace valer causas de improcedencia.

2. Forma. El escrito del tercero interesado fue debidamente presentado ante la autoridad responsable, en el cual hace constar el nombre y firma autógrafa del compareciente, el domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para ese efecto; así también, hace valer causales de improcedencia, cuyo estudio se abordará en el considerando precedente, por ser previo al del fondo del litigio y se formulan oposiciones en razón del interés incompatible con las pretensiones de quien promueve el presente juicio (fojas 24 a 55).

3. Oportunidad. De conformidad con los artículos 23, inciso b), y artículo 24, de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, la autoridad responsable que reciba un medio de impugnación, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato deberá hacerlo de conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de setenta y dos horas se fije en estrados respectivos, lo que así aconteció en el sumario, pues de la pieza de autos en estudio se advierte que, el Secretario del Comité **Distrital 10 Morelia Noroeste** de **esta ciudad**, llevó a cabo la publicitación correspondiente a partir de las **cero horas con once minutos**

del dieciséis de junio de dos mil quince; en tanto que, el ocurso del tercero interesado fue presentado ante la autoridad responsable a las doce horas con treinta minutos del dieciocho de junio siguiente, es decir, dentro del plazo a que hace mención la legislación en cita (foja 58).

V. Remisión del juicio de inconformidad al Tribunal Electoral. Mediante oficio 13/2015, de diecinueve de junio del año en curso, el Secretario del Comité Distrital responsable, envió a este órgano jurisdiccional la demanda del juicio de inconformidad y anexos que se acompañaron; adjuntando además, las constancias y cédulas de notificación, el informe circunstanciado, así como el escrito del tercero interesado (foja 3 a 55).

VI. Recepción del juicio de inconformidad. A las dieciséis horas con diecinueve minutos, del diecinueve de junio del año en curso, en la Oficialía de Partes de este Tribunal, se recibieron las constancias que integran el juicio de inconformidad (foja 3).

VII. Registro y turno a ponencia. El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, José René Olivos Campos, por auto de diecinueve de junio pasado, acordó registrar el expediente con la clave **TEEM-JIN-074/2015**, y turnarlo a esta ponencia a cargo del Magistrado Omero Valdovinos Mercado, para los efectos previstos en el artículo 27, de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo (fojas 132 a 134).

VIII. Radicación y admisión. El **veinte** de junio de dos mil quince, se ordenó **radicar y admitir** el juicio de inconformidad, así como registrarlo en el libro de Gobierno de la ponencia instructora con la clave **TEEM-JIN-074/2015**. (fojas 140 a 142).

IX. Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización. En auto de **veintinueve** de junio siguiente, y toda vez que el promovente en su escrito inicial de demanda, expresó agravios relacionados con el rebase en tope de gastos de campaña, se ordenó dar vista al Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que se pronunciara en el ámbito de sus atribuciones, sobre dichas cuestiones (fojas 154 y 155).

X. Informe sobre la vista. Mediante oficio INE/UTF/DRN/18315/15, de tres de julio de dos mil quince, remitido vía correo electrónico, el funcionario electoral federal señalado en el párrafo que antecede, informó que el pronunciamiento sobre los gastos de campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, lo haría hasta el trece de julio siguiente, y que a la fecha en que desahogaba la vista ordenada, la unidad de fiscalización no tenía registro de quejas por el promovente del juicio de mérito que ahora se resuelve (fojas 163 a 167).

XI. Requerimiento de constancias. En proveído de **diez** de julio pasado, para mejor proveer, se requirió al Consejo **Distrital 10 de Morelia Noroeste** del Instituto Electoral de Michoacán, para que remitiera a este tribunal diversa documentación para la debida integración del asunto que nos ocupa (fojas 185y 186).

XII. Informe calendarización del proceso de autorización por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Mediante oficio INE/UTF/DRN/18833/15, de nueve de julio de dos mil quince, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, suscrito por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, informó que el cuatro del mes y año en cita, en sesión extraordinaria urgente la citada Comisión aprobó el *“Acuerdo por el que se aprueba la actualización del calendario de etapas del proceso de aprobación de la Comisión de Fiscalización y de Consejo General de los informes de campaña del Proceso Ordinario Local y Federal 2014-2015”*; razón por la cual sería hasta el veinte de julio de este año, que se presentarían para su aprobación, al máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral, los dictámenes y resoluciones derivados de la remisión de los informes de campaña del proceso electoral que se encuentra en curso (fojas 175 a 184).

XIII. Cumplimiento de requerimiento por parte del Instituto Electoral de Michoacán. Mediante proveído de once de julio pasado, se tuvo al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Michoacán, cumpliendo el requerimiento formulado por esta Ponencia, en proveído de diez de los actuales, al exhibir las documentales que le fueron solicitadas (fojas 193 a 211).

XIV. Recepción del Dictamen Consolidado y anexos. En proveído de veinticinco de julio siguiente, se tuvo por recibido y ordenó agregar a los autos, el oficio suscrito por la Secretaria General de Acuerdos de este órgano

jurisdiccional, al que adjuntó, copia certificada de diversos comunicados enviados por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante los cuales se atendieron diversos requerimientos realizados por este tribunal; de la resolución INE/CG487/2015, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, correspondientes al proceso electoral local ordinario 2014-2015, en esta entidad federativa y, el disco compacto (CD), que incluye la información relativa al dictamen consolidado y anexos (fojas 221 y 222).

XV. Admisión y desechamiento de pruebas. En proveído de treinta y uno de julio de dos mil quince, se tuvo por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por la actora consistentes en instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, no así en lo relativo a girar oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a cada uno de los proveedores inscritos en el padrón del Instituto Nacional Electoral para los fines que señaló en el escrito inicial, debido a que el promovente no justificó que oportunamente las haya solicitado por escrito a las referidas instituciones, y que éstas no le hubieren sido entregadas, o en su caso, hubiere tenido impedimento para realizarlo; aunado a que con su ofrecimiento pretendía acreditar el rebase del tope de gastos de precampaña o campaña, proceso de fiscalización respecto del que el Consejo del Instituto Nacional Electoral, se pronunció mediante el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y egresos de los

candidatos a los cargos de Gobernador, entre otros, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2014-2015, resultando innecesario solicitar dichas probanzas; de igual manera, se tuvieron por admitidas y desahogadas las probanzas ofrendadas por la parte tercero interesado, relativas a las documentales adjuntas, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana (fojas 230 y 231)

XVI. Cierre de instrucción. En acuerdo de esa misma fecha, se declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia de conformidad con lo establecido en la fracción V, del dispositivo 27 de la ley electoral (fojas 230 y 231).

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ejerce jurisdicción y, el Pleno es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con los artículos 98-A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 60 del Código Electoral del Estado, 55, fracción I, y 58 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, así como 49 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, por tratarse de un juicio de inconformidad en el que se demanda la nulidad de la elección de Gobernador dentro del Distrito **Electoral 10, Morelia Noroeste**, con sede en **esta ciudad**.

SEGUNDO. Estudio oficioso de la improcedencia del juicio de inconformidad. El partido político Revolucionario

Institucional, por conducto de su representante **suplente**, en la demanda del juicio de inconformidad señala como acto reclamado, entre otros, el relativo al *“Acta Pormenorizada del Conteo, Sellado y Enfajillado de las Boletas Electorales...de la Elección de Gobernador en el Distrito DIEZ MORELIA NOROESTE, de esta ciudad de MORELIA, MICHOACAN, actos que se atribuyen al Consejo Electoral del Distrito en comento”*.

Contra el acto recién identificado, el juicio que nos ocupa es improcedente.

Antes, es pertinente destacar que el artículo 41, Apartado C, punto 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

“Artículo 41. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

...

3. *Preparación de la jornada electoral;*

...”

De la interpretación gramatical de dicho precepto legal se infiere, que las elecciones en los estados de la República Mexicana, estarán cargo de organismos públicos locales, quienes ejercerán, entre otras funciones, la de preparación de la jornada electoral.

Relacionado con ello, los preceptos 182, 183 y 194, del Código Electoral, en lo que interesa, establecen:

“Artículo 182. El proceso electoral, para elecciones ordinarias de Gobernador, diputados y ayuntamientos, en septiembre del año previo al de la elección, y concluye

con la última declaración de validez, una vez resueltos en definitiva los medios de impugnación que se presenten o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno, según sea el caso.

El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Local y este Código, realizados por las autoridades, los partidos políticos, candidatos independientes y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los ayuntamientos.

Para los efectos de este Código, el proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes:

- a) **Preparación de la elección;**
- b) Jornada electoral; y,
- c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Gobernador electo”.

“Artículo 183. *El Consejo General declarará el inicio de la etapa preparatoria de la elección, en la sesión convocada para este fin la primera semana de septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones; la que concluye al iniciarse la jornada electoral”.*

“Artículo 194. *Las boletas para la elección de Gobernador y diputados deberán estar en poder de los consejos electorales de comités distritales, quince días antes de la elección, los consejos electorales de comités municipales deberán recibir las correspondientes a la elección de ayuntamientos a más tardar quince días antes.*

Para su control se tomarán las medidas siguientes:

I. *El personal autorizado del Instituto entregará las boletas en el día, hora y lugar preestablecidos, a los Presidentes de los Consejos Electorales de comités distritales y municipales, quienes estarán acompañados de los demás integrantes de los propios consejos que deseen asistir;*

II. *El Secretario del Consejo Electoral de Comité Distrital o Municipal levantará acta pormenorizada de la entrega y recepción de las boletas, asentando en ella los datos relativos al número de boletas, las características del embalaje que las contiene, y los nombres y cargos de los funcionarios presentes;*

III. *A continuación, los miembros presentes del Consejo Electoral de Comité Distrital o Municipal,*

acompañarán al Presidente para depositar la documentación recibida, en el local autorizado, debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva;

IV. El mismo día o a más tardar el siguiente, el Presidente del Consejo, el Secretario y los consejeros electorales procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida, sellarlas al reverso y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar, incluyendo las casillas especiales, según el número que acuerde el Consejo General para ellas. El Secretario registrará los datos de esta distribución; y,

V. Estas operaciones se realizarán con la presencia de los representantes que decidan asistir.

Los representantes bajo su más estricta responsabilidad, sí lo desearan, podrán firmar las boletas, levantándose un acta en la que consten el número de boletas que se les dio a firmar, el número de las firmadas y, en su caso, el número de boletas faltantes después de haber realizado el procedimiento de firma. En este último caso se dará la noticia de inmediato a la autoridad competente.

La falta de firma de los representantes de las boletas no impedirá su oportuna distribución.

Los consejos electorales de comités distritales entregarán a los consejos electorales de comités municipales las boletas de Gobernador del Estado y diputados, siguiendo, en lo conducente lo establecido en las fracciones I, II y III de este artículo.

...”

Una interpretación funcional y sistemática de los numerales trasuntos, pone de manifiesto, en lo que interesa, que el proceso electoral para elecciones ordinarias de Gobernador, entre otras, inicia la primera semana de octubre del año previo a la elección, y concluye con la última declaración de validez, proceso que comprende, entre sus etapas, la correspondiente a la preparación de la elección, la cual finaliza **al iniciarse la jornada electoral**; dentro de aquella etapa, las boletas de la elección de gobernador,

deberán estar en poder de los consejos electorales de comités distritales, quince días antes de la elección, para ello, el personal autorizado del instituto entregará las boletas en el día, hora y lugar preestablecidos, a los Presidentes de los Consejos Electorales de comités distritales y municipales, acompañados de los demás integrantes de los propios consejos que deseen asistir; el Secretario del Consejo Electoral de Comité Distrital o Municipal, levantará **acta pormenorizada de la entrega y recepción de las boletas**, asentando en ellas los datos relativos al número de boletas, las características del embalaje que las contiene, y los nombres y los cargos de los funcionarios presentes, así, los miembros presentes, acompañarán al Presidente del comité a depositar la documentación recibida en el local autorizado, debiendo **asegurar su integridad mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes**.

En tanto que, el primer párrafo del artículo 98 A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, refiere:

“Artículo 98 A. Se establecerá un sistema de medios de impugnación, en los términos que señale esta Constitución y la Ley, de los que conocerá el organismo público previsto en el artículo anterior y el Tribunal Electoral del Estado. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará que los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad”.

De la interpretación literal de dicho normativo, es dable desprender, que tanto el Instituto Electoral de Michoacán, como este tribunal electoral, deben conocer de los medios de impugnación previstos en dicha constitución y la ley electoral, a través de los cuales se dará **definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales** y garantizará

que los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

En la especie, como ya anunció, el partido político actor, reclama, entre otros actos, el acta de sesión permanente de Cómputo Municipal, Pormenorizada del Conteo, Sellado y Enfajillado de las boletas electorales, respecto de la elección de Gobernador del Estado, la cual obra en autos, de la que se destaca lo siguiente:

“ACTA PORMENORIZADA DEL CONTEO SELLADO Y ENFAJILLADO

BOLETAS ELECTORALES.

En la Ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 28 veintiocho de mayo de 2015 dos mil quince, en las oficinas que ocupa el Comité Distrital 16 y Municipal Electoral de Morelia, ubicado en la calle Ignacio Aldama #274 de la colonia Indeco el Viveros órgano desconcentrado del Instituto Electoral de Michoacán, se reunieron los funcionarios electorales, consejeros y representantes de los partidos políticos de los cuatro comités distritales, en el Consejo Distrital 16 en esta ciudad, que a continuación de mencionan.

Comité 16.

<i>Presidente</i>	<i>Juan Eduardo Torres Chávez</i>
<i>Secretario</i>	<i>Julio César Larios Bocanegra</i>
<i>Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica</i>	<i>Denisse Viviana Cervantes Pérez</i>
<i>Vocal De Organización Electoral</i>	<i>Norma Angélica González Tapia</i>
<i>Consejero Electoral</i>	<i>Genaro Moreno Iriarte</i>
<i>Consejero Electoral</i>	<i>Gricelda Leal Gómez</i>
<i>Consejero Electoral</i>	<i>Sigfrido Macías Alemán</i>
<i>Consejero Electoral</i>	<i>Mauricio Sarmiento Cruz</i>

<i>Representante del Partido Acción Nacional</i>	<i>Carlos Francisco Castelazo Mendoza</i>
<i>Representante del Partido de la Revolución Democrática</i>	<i>Christian Benait Couto Ponce</i>

Comité 10.

<i>Presidente</i>	<i>Marco Antonio Ibarra Echeverría</i>
<i>Secretario</i>	<i>Eli Coria Salas</i>
<i>Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica</i>	<i>Gerardo Armando Ortiz Alanís</i>
<i>Vocal De Organización Electoral</i>	<i>Ma. Isabel Ayala Espino</i>
<i>Consejero Electoral</i>	<i>Rocio de Guadalupe Martínez Ruiz</i>
<i>Consejero Electoral</i>	<i>Richard Omar Galván Coronel</i>
<i>Consejero Electoral</i>	<i>Eleazar Ponce Alejandre</i>
<i>Consejero Electoral</i>	<i>Juan Paniagua Zarza</i>
<i>Representante del Partido de la Revolución Democrática</i>	<i>José Luis Muñiz Resendíz</i>
<i>Representante del Partido del Trabajo</i>	<i>Raymundo Delgado Peña</i>

Comité 11.

<i>Presidente</i>	<i>Luis Felipe Reynoso Díaz</i>
<i>Secretario</i>	<i>María Cristina Iniestra Álvarez</i>
<i>Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica</i>	<i>Dayana Dávalos Botello</i>
<i>Vocal De Organización Electoral</i>	<i>Consuelo Arizbet Torres Calderón</i>
<i>Consejero Electoral</i>	<i>Leticia Cruz González</i>
<i>Consejero Electoral</i>	<i>Blanca Elena Rojas Figueroa</i>
<i>Consejero Electoral</i>	<i>Elisa Sandoval Moreno</i>
<i>Consejero Electoral</i>	<i>José Mario Valencia</i>

<i>Representante del Partido de la Revolución Democrática</i>	<i>Luis Antonio Arciga Anzo</i>
---	---------------------------------

<i>Representante del Partido del Trabajo</i>	<i>Norma Hilda Ontañón Alfaro</i>
<i>Representante del Partido Revolucionario Institucional</i>	<i>Rafael Eric Anguiano Huazano</i>
<i>Partido de Nueva Alianza</i>	<i>Minerva Campos Ramírez</i>

Comité 17.

<i>Presidente</i>	<i>Adriana Maldonado Martínez</i>
<i>Secretario</i>	<i>Francisco Javier Estrada Laguna</i>
<i>Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica</i>	<i>Martha Alicia Basurto Aguirre</i>
<i>Vocal De Organización Electoral</i>	<i>Verónica Márquez Ponce</i>
<i>Consejero Electoral</i>	<i>Norma Álvarez Galván</i>
<i>Consejero Electoral</i>	<i>Blanca Alejandra Delgado Lemus</i>
<i>Consejero Electoral</i>	<i>Obed Vicente Medécigo</i>
<i>Consejero Electoral</i>	<i>Héctor Ruíz Arias</i>
<i>Representante del Partido de la Revolución Democrática</i>	<i>Osiris Brisa Tapia Martínez</i>
<i>Representante del Partido del Trabajo</i>	<i>Gabriela Flores Ramírez</i>
<i>Representante del Partido Revolucionario Institucional</i>	<i>Nisandro Alvarado Guerrero</i>

A efecto de dar cumplimiento al artículo 194 del Código Electoral del Estado de Michoacán, con la finalidad de realizar el conteo, sellado, enfajillado y en su caso la inutilización de las boletas electorales para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamiento que se llevará a cabo el próximo 7 siete de junio del presente año, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2015 en la entidad; en el acuerdo 315 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en Sesión Extraordinaria del pasado 25 de mayo de 2015 dos mil quince, para el presente Proceso Electoral.

Así, reunidos las personas anteriormente mencionadas en las oficinas del Comité Distrital 16 y Municipal de Morelia; y siendo las 05:10 cinco horas con diez minutos del día, arribaron cuatro camionetas de tres y media toneladas, con las siguientes características; 1.- Camioneta de tres y media toneladas de color blanco con número de placas NR-46238 del estado de Michoacán, conduciéndola el C. Joaquín Lara Hernández y resguardándola el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública- Fuerza Ciudadana: Humberto Tapia Balderas. 2.- Camioneta de tres y media toneladas de color blanco con número de placas NP-72748 del estado de Michoacán, conduciéndola el C. Martín Omar Guillén Torres y resguardándola el elemento de la Secretaría de Seguridad pública- Fuerza Ciudadana: Valerio Gutiérrez López. 3.- Camioneta de tres y media toneladas de color rojo con número de placas NK-59-912 del estado de Michoacán, conduciéndola el C. Uriel Guízar Ávila y resguardándola el elemento de la Secretaría de Seguridad pública- Fuerza Ciudadana: Pedro Moreno Flores. 4.- Camioneta de tres y media toneladas de color azul con número de placas NK-50-507 del estado de Michoacán, conduciéndola el C. Jaime Torres Navarrete y resguardándola el elemento de la Secretaría de Seguridad pública- Fuerza Ciudadana: Jesús Alberto Montes Robles, así como el ciudadano Bladimir Pérez Molina, Enlace autorizado por el Instituto Electoral de Michoacán, para hacer entrega real y material de las boletas. -----

Posteriormente y en presencia de los cuatro secretarios de los comités distritales, los CC. Julio César Larios Bocanegra, Eli Coria Salas, Francisco Estrada Lagunas y María Cristina Iniestra Álvarez, se comenzó con la descarga de un total de 237 cajas que contienen las boletas electorales para la elección de Gobernador, 237 cajas contienen las boletas electorales para la elección de diputados y 237 cajas contienen las boletas electorales para la elección de Ayuntamiento que transportaban los vehículos de referencia, lo anterior, considerando que en cada una de las cajas se señala como contenido de las mismas, el siguiente:

Comité 10

Gobernador

CAJA NO.	DEL FOLIO	AL FOLIO	TOTAL DE BOLETAS	ELECCIÓN
1	1411504	1414100	2597	Gobernador
2	1414101	1416700	2600	Gobernador
3	1416701	1519300	2600	Gobernador
4	1419301	1421900	2600	Gobernador
5	1421901	1424500	2600	Gobernador
6	1424501	1427100	2600	Gobernador
7	1427101	1429700	2600	Gobernador
8	1429701	1432300	2600	Gobernador
9	1432301	1434900	2600	Gobernador
10	1434901	1437500	2600	Gobernador
11	1437501	1440100	2600	Gobernador
12	1440101	1442700	2600	Gobernador
13	1442701	1445300	2600	Gobernador
14	1445301	1447900	2600	Gobernador
15	1447901	1450500	2600	Gobernador
16	1450501	1453100	2600	Gobernador
17	1453101	1455700	2600	Gobernador
18	1455701	1458300	2600	Gobernador
19	1458301	1460900	2600	Gobernador
20	1460901	1463500	2600	Gobernador
21	1463501	1463100	2600	Gobernador
22	1463101	1468700	2600	Gobernador
23	1468701	1471300	2600	Gobernador
24	1471301	1473900	2600	Gobernador

25	1473901	1476500	2600	Gobernador
26	1476501	1479100	2600	Gobernador
27	1479101	1481700	2600	Gobernador
28	1481701	1484300	2600	Gobernador
29	1484301	1486900	2600	Gobernador
30	1486901	1489500	2600	Gobernador
31	1489501	1492100	2600	Gobernador
32	1492101	1494700	2600	Gobernador
33	1494701	1497300	2600	Gobernador
34	1497301	1499900	2600	Gobernador
35	1499901	1502500	2600	Gobernador
36	1502501	1505100	2600	Gobernador
37	1505101	1507700	2600	Gobernador
38	1507701	1510300	2600	Gobernador
39	1510301	1512900	2600	Gobernador
40	1512901	1515500	2600	Gobernador
41	1515501	1518100	2600	Gobernador
42	1518101	1520700	2600	Gobernador
43	1520701	1523300	2600	Gobernador
44	1523301	1525900	2600	Gobernador
45	1525901	1528500	2600	Gobernador
46	1528501	1531100	2600	Gobernador
47	1531101	1533700	2600	Gobernador
48	1533701	1536300	2600	Gobernador
49	1536301	1538900	2600	Gobernador
50	1538901	1541500	2600	Gobernador
51	1541501	1544100	2600	Gobernador
52	1544101	1546700	2600	Gobernador

53	1546701	1549300	2600	Gobernador
54	1549301	1551900	2600	Gobernador
55	1551901	1554500	2600	Gobernador
56	1554501	1557100	2600	Gobernador
57	1557101	1559700	2600	Gobernador
58	1559701	1562300	2600	Gobernador
59	1562301	1564900	2600	Gobernador
60	1564901	1567500	2600	Gobernador
61	1567501	1570100	2600	Gobernador
62	1570101	1570877	777	Gobernador

[...]

En la misma tesitura se hace constar que una vez que se llevó a cabo por cada uno de los comités los procedimientos de conteo, sellado y enfajillado de sus respectivas boletas, se procedió a la inutilización de las sobrantes, para su resguardo temporal en la bodega respectiva del citado comité Municipal y Distrital 16, Morelia Suroeste; con el objetivo de su posterior remisión a la bodega general del Instituto Electoral de Michoacán.

Concluidas las actividades relativas al Conteo, Sellado y Enfajillado de boletas electorales, siendo las 22:00 horas del día 30 de mayo del 2015, se da por terminada la presente acta pormenorizada; firmando para su debida constancia legal las personas que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo". (fojas 113 a 130).

Con base en lo anterior, este órgano colegiado arriba a la consideración, de que los actos derivados de la actuación aludida y que reclama el actor, se comprenden dentro de la etapa de preparación de la elección, por ende, lo actuado en la misma, en manera alguna es reclamable a través del presente juicio de inconformidad, ya que por disposición

expresa del artículo 55, fracción I, de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana de la localidad, dicho medio de impugnación procederá durante el proceso electoral **y exclusivamente en la etapa de resultados y declaraciones de validez**, en contra de las determinaciones de las autoridades electorales que violen normas constitucionales o legales, y en la elección de Gobernador, **contra los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por error aritmético** o en su caso, contra los resultados consignados en el acta de cómputo estatal, por error aritmético, y consecuentemente, contra el otorgamiento de la constancia de mayoría y por violación a principios constitucionales ocurridos durante el proceso electoral.

Así pues, si reiterando, en el caso el acto aquí analizado se hace consistir en el acta de sesión permanente de Cómputo Municipal, Pormenorizada del Conteo, Sellado y Enfajillado de las boletas electorales, respecto de la elección de Gobernador del Estado de Michoacán, realizada el **veintiocho de mayo** de dos mil quince, es inconcuso, que dicha actuación tuvo lugar en la etapa de preparación de la elección atribuida al Consejo **Distrital Electoral 10 Morelia Noroeste**, con sede en **esta ciudad**, cuyo resultado pudo impugnarse a través del recurso de revisión.

En efecto, el primer párrafo del artículo 47 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana vigente en la localidad, dispone:

“Artículo 47. Dentro de un proceso electoral exclusivamente en la etapa de preparación de la elección,

el recurso de revisión procederá, para los partidos políticos, coaliciones, candidatos comunes o candidatos independientes, contra los actos, acuerdos y resoluciones de los consejos distritales y municipales, emitidos hasta cinco días antes de la elección.

...”

De la interpretación gramatical y sistemática de dicho precepto, se infiere que dentro del proceso electoral y exclusivamente, en la etapa de **preparación de la elección**, el recurso de revisión es el que pueden hacer valer **los partidos políticos**, coaliciones, candidatos comunes o candidatos independientes, **contra los actos, acuerdos y resoluciones de los consejos distritales y municipales**, emitidos hasta cinco días antes de la elección.

Luego, si como ya se indicó, el acta de sesión permanente de Cómputo Municipal, Pormenorizada del Conteo, Sellado y Enfajillado de las boletas electorales, respecto de la elección de Gobernador del Estado de Michoacán, no se impugnó dentro del término previsto por el precepto 47 de la ley instrumental de la materia, es inconcuso que el acto reclamado se considera definitivo.

Se cita como orientador, el criterio emitido por la Sala Regional de la IV Circunscripción Plurinominal con residencia en el Distrito Federal, de dos de agosto de dos mil tres, en el expediente identificado como SDF-IV-JIN-007/2003, en el que se abordó un tema similar al que nos ocupa.

Se suma a lo anterior, el que la Sala Superior ha sostenido que las resoluciones y los actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales correspondientes, en relación con el desarrollo de un

proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgarle certeza al desarrollo de los comicios, así como seguridad jurídica a los participantes en los mismos, fue explicado y razonado ese tópico en la ejecutoria dictada el veintinueve de noviembre de dos mil trece, en el expediente identificado con la clave SUP-REC-109/2013, en la que además se acotó, que los actos y resoluciones emitidos en una determinada etapa del proceso electoral, adquieren firmeza y definitividad ordinariamente al concluir dicha etapa, por lo que no pueden ser revocados, modificados o sustituidos en una posterior; de lo contrario pugnaría con el principio de invariabilidad de las resoluciones.

Decisión que se apoya además, en la tesis XL/99, visible en la página 64, de la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, del tenor siguiente:

“PROCESO ELECTORAL. SUPUESTO EN QUE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE CADA UNA DE SUS ETAPAS PROPICIA LA IRREPARABILIDAD DE LAS PRETENDIDAS VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA ETAPA ANTERIOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SIMILARES). *Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 41, segundo párrafo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente dispone: “Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales ...” y, 20, segundo párrafo, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, que en la parte correlativa, y en lo que interesa, establece: “La Ley establecerá un sistema de medios de impugnación para garantizar...que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de*

legalidad...tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales...”, **se concluye que las resoluciones y los actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales correspondientes, en relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgarle certeza al desarrollo de los comicios, así como seguridad jurídica a los participantes en los mismos.** En ese sentido, el acuerdo por el cual se amplía el plazo para el registro de los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla y de sus representantes generales que pueden actuar ante las mismas por la ausencia de aquellos, forma parte de la etapa de preparación de la elección y, toda vez que ésta concluye al inicio de la jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales constitucionalmente previsto, resulta material y jurídicamente imposible en la etapa de resultados electorales reparar la violación que, en su caso, se hubiere cometido a través del referido acuerdo de ampliación de los correspondientes registros, en virtud de que no puede revocarse o modificarse una situación jurídica correspondiente a una etapa anterior ya concluida, como es el caso de la preparación de la elección, toda vez que lo contrario implicaría afectar el bien jurídico protegido consistente en la certeza en el desarrollo de los comicios y la seguridad jurídica a los participantes en los mismos, ya que, **al concluir la etapa de preparación de la elección, los actos y resoluciones ocurridos durante la misma que hayan surtido plenos efectos y no se hayan revocado o modificado dentro de la propia etapa, deberán tenerse por definitivos y firmes con el objeto de que los partidos políticos, ciudadanos y autoridades electorales se conduzcan conforme a ellos durante las etapas posteriores,** adquiriendo por tales razones el carácter de irreparables a través del juicio de revisión constitucional electoral, en términos del artículo 86, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral”(lo resaltado es propio).

De tal manera que, no debe perderse de vista, que el principio de definitividad y firmeza se cumple cuando se agotan las instancias previas establecidas en la normatividad correspondiente, y tiene como presupuesto que éstas sean

idóneas, aptas, suficientes y eficaces para alcanzar las pretensiones de los justiciables en el pleno uso y goce del derecho presuntamente violado, pues sólo de esta manera se da cumplimiento a la máxima constitucional de justicia pronta, completa y expedita, aunado a que otorga racionalidad a la cadena impugnativa, requisitos que en el caso concreto se cumplen, toda vez que, tratándose del recurso de revisión en comento, el último párrafo, del normativo 49 de la ley en cita, estipula que las resoluciones recaídas en dichos medios de impugnación, tendrán como efecto la **confirmación, modificación o revocación del acto o resolución impugnada**, es decir, cumple con los principios fundamentales del debido proceso legal¹ y resulta efectivo para reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones que se hayan cometido con el acto o resolución que se reclame, resultando congruente con los principios del debido proceso recogido en el artículo 17 de la ley fundamental.

Ilustra en ese sentido, la jurisprudencia 9/2008, localizable en la página 22, de la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, que dice:

“PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO ES EL MEDIO IDÓNEO PARA LOGRAR LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO INTRAPARTIDISTA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR LA CADENA IMPUGNATIVA. De conformidad con el artículo 99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos político-electorales, con motivo de actos

¹ Semanario Judicial de la Federación. Jurisprudencia 1ª/J. 11/20014 (10ª). Décima Época. “DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO”.

u omisiones del partido político al que se encuentre afiliado, tiene la obligación de agotar, previamente, las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas. El cumplimiento de ese requisito tiene como presupuesto que los procedimientos previstos para la solución de conflictos establecidos en la normatividad de los institutos políticos, cumplan con los principios fundamentales del debido proceso legal, de modo que éstos sean efectivos para reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones que se hayan cometido con el acto o resolución que se combata, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 17 y 99, fracción V, constitucionales, en relación con el artículo 27, apartado 1, inciso g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, cuando presentado el medio de defensa intrapartidario, el órgano responsable de tramitar y resolver la instancia impugnativa, indebidamente deja de resolver la controversia planteada, se aparta de los principios inherentes al debido proceso que exige la restitución efectiva en los términos que imponen los preceptos constitucionales invocados, entonces se extingue, por excepción y bajo ciertas condiciones, la carga procesal de agotarlos, y se puede ocurrir directamente a la vía constitucional, pues las situaciones apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza corresponde a los procesos impugnativos”.

Del mismo modo, resulta improcedente el juicio de inconformidad planteado por el promovente, con relación al acto consistente en **la declaración de validez de Elección de Gobernador en el Distrito Electoral 10 Morelia Noroeste**, acto que le reclama al Consejo Distrital Electoral en cita.

En la especie, es conveniente invocar el numeral 64, fracción I, del Código Electoral del Estado de Michoacán, que dispone:

“Artículo 64. *El Pleno del Tribunal, tendrá la competencia y atribuciones siguientes:*

I. *Declarar la legalidad y validez de la elección de Gobernador del Estado, y hacer la declaratoria correspondiente, una vez resueltos los*

juicios de inconformidad que se hubieren interpuesto sobre la misma...”.

Dicho dispositivo legal determina que al Pleno de este Tribunal Electoral, corresponde resolver sobre la legalidad y validez de la elección de Gobernador del Estado, así como hacer la declaratoria correspondiente, una vez resueltos los juicios de inconformidad que se hubieren interpuesto sobre la elección de que se habla.

Por su parte, el artículo 11, fracción II, de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, establece lo siguiente:

“Artículo 11. *Los medios de impugnación previstos en esta Ley serán improcedentes en los casos siguientes:*

...
II. *Cuando los actos, acuerdos o resoluciones que se pretendan impugnar no se ajusten a las reglas particulares de procedencia de cada medio de impugnación.*

...”

Del numeral en cita, es dable desprender, que los medios de impugnación en materia electoral resultarán improcedentes, entre otros casos, cuando los actos, acuerdos o resoluciones que se pretendan recurrir, no se ajusten a las reglas predeterminadas para su procedencia.

En ese contexto, resulta improcedente el presente juicio de inconformidad, en razón de que la parte actora, como ya se dijo, reclamó el acto citado de declaración de validez de la elección de Gobernador del Estado, al referido al Consejo **Distrital 10 Morelia Noroeste** del Instituto Electoral de Michoacán, con residencia en **esta ciudad**, quién en términos

del precepto en cita, no es el facultado para calificarlo, pues esta queda reservada para este cuerpo colegiado.

Orienta en lo sustancial, la tesis VI/2005, localizable en la página 467, de la Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dice:

“DECLARACIÓN DE VALIDEZ DEFINITIVA DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR. ES IMPROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN POR NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). *La interpretación del artículo 55, segundo párrafo, fracción I, de la Ley del Sistema de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas permite establecer que el juicio de nulidad electoral procedente para impugnar la elección de gobernador, puede promoverse en dos tiempos, contra diferentes actos, y hacer valer distintas causas de pedir: 1) cuando se promueva contra las actas de cómputo distrital, podrá invocarse la nulidad de votación recibida en casillas y errores aritméticos del cómputo distrital de gobernador, y 2) si el acto reclamado es el cómputo estatal definitivo y la declaración de validez realizada por el tribunal estatal electoral, la causa de pedir será el error aritmético del cómputo estatal o la nulidad de la elección, sin poder aducirse la nulidad de la votación recibida en casillas. Ciertamente, una regla general en los medios de impugnación, consiste en que en ellos se enjuician directamente los actos reclamados destacadamente, frente a la autoridad emisora, con la excepción comprensible en el sistema electoral, de las actas de la jornada electoral levantadas en cada casilla, cuya impugnación se debe hacer en la demanda enderezada contra los respectivos cómputos distritales, ante la desaparición de las mesas directivas de casilla, al finalizar dicha jornada. Conforme al sistema establecido en la legislación electoral del Estado de Zacatecas, respecto al cómputo de la elección de gobernador, la declaración de validez y la entrega de constancias (artículos 200 a 205, 220 a 222 y 234 al 236 y 239), corresponde al consejo distrital hacer el cómputo respectivo, mediante la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas*

*instaladas en el distrito correspondiente, sin hacer declaración respecto al ganador de la elección o su validez; al Consejo General corresponde realizar el cómputo estatal, mediante la suma de los resultados contenidos en las actas de cómputos distritales, examinar la elección, declararla válida provisionalmente y expedir la constancia provisional de mayoría, **y al tribunal estatal electoral concierne realizar el cómputo final, hacer la declaración definitiva de validez y entregar la constancia de mayoría, con carácter definitivo.** De este modo, cuando se impugnen los actos del tribunal, únicamente podrá aducirse la nulidad de la elección o error aritmético en el cómputo estatal, al ser éstos los posibles vicios atribuibles a sus actos, no así la nulidad de la votación recibida en casilla, o el error aritmético del cómputo distrital, aducibles solamente en el juicio dirigido contra este cómputo distrital”.*

En esas condiciones, dada la improcedencia del juicio de inconformidad planteado por la parte actora, contra el acta pormenorizada de conteo, sellado y enfajillado de las boletas electorales y la declaración de validez de la elección de Gobernador del Estado, señalados como actos reclamados en la demanda inicial, en la especie, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 11, de la ley instrumental de la materia.

Consecuentemente, lo procedente en este asunto, es **sobreseer** respecto de los actos reclamados, en términos de la fracción III, del precepto 12 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, que reza:

“Artículo 12. *Procede el sobreseimiento cuando:*

- ...
- III.** *Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos de la presente Ley; y,*
...”

TERCERO. Causas de improcedencia invocadas por la parte tercero interesada. Al ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se analizarán en primer término, las causales de improcedencia hechas valer por el Partido de la Revolución Democrática, en su carácter de tercero interesado en el presente medio de impugnación.

El representante **propietario** del instituto político de mérito, afirma que el juicio de inconformidad es improcedente, porque el acto reclamado fue consentido, debido a que el partido político denunciante estuvo presente durante la sesión de cómputo distrital, la cual dice, inició el diez de junio de este año, y validó la votación recibida en las casillas, el actuar, los actos y acuerdos del Consejo Distrital, lo cual se ve reflejado en el acta de sesión de cómputo, la que agrega, fue firmada por el representante del partido quejoso; argumentos que sustenta en la causal de improcedencia prevista en el artículo 11, fracción III, de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, que literalmente dispone:

*“**Artículo 11.** Los medios de impugnación previstos en esta Ley serán improcedentes en los casos siguientes:*

[...]

*III. Cuando se pretenda impugnar actos, acuerdos o resoluciones, que no afecten el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; **que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de la voluntad que entrañen ese consentimiento;** o aquéllos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esta Ley...”* (lo resaltado es propio).

Lo anterior es infundado, pues si bien es verdad, de las constancias del sumario, específicamente, del acta

circunstanciada de la sesión de cómputo distrital -foja 102-, se desprende, entre otros datos, lo siguiente:

“En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 8:45 ocho horas con cuarenta y cinco minutos del día 10 de Junio del 2015 dos mil quince, en las oficinas que ocupa el Comité Distrital Electoral de Morelia 10 Noroeste...se reunieron los funcionarios electorales, consejeros y representantes de los partidos políticos...”

De lo expuesto se advierte que desde el inicio de la sesión y hasta su conclusión, estuvieron presentes, entre otros, los representantes de los partidos políticos y coaliciones acreditados ante el Consejo señalado como responsable, documento que tiene a calidad de público y, por ende, goza de eficacia demostrativa plena, al tenor de los artículos 243, inciso a), del Código Electoral del Estado, en relación con los numerales 16, fracción I, 17, fracción I, 22, fracción II, de la ley instrumental del ramo.

Empero, dicha circunstancia, esto es, la presencia del hoy inconforme en la sesión de cómputo respectiva, en modo alguno lo priva del derecho de recurrir lo determinado en la misma, esto es, el resultado de la elección de Gobernador consignados en dicha actuación, si conforme a lo previsto en el artículo 55, fracción I, de la ley adjetiva electoral, es procedente el juicio de inconformidad, durante el proceso electoral, exclusivamente en la etapa de resultados y de declaraciones de validez, y tratándose de elecciones de Gobernador, **contra los resultados consignados en las actas de cómputo distrital**, como sucede con el acto reclamado en el caso; de ahí lo infundado de la causal de improcedencia analizada.

Sirve como ilustrativa, la tesis XCV/2002, publicada en la página 147, de la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, del rubro:

“INCONFORMIDAD. ES EL JUICIO IDÓNEO PARA COMBATIR LAS VIOLACIONES OCURRIDAS DURANTE LAS SESIONES DE CÓMPUTO MUNICIPAL, DISTRITAL O ESTATAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). En los artículos 269 a 273 del Código Electoral del Estado de México se regula la realización del cómputo municipal de la elección que corresponda; si bien es cierto que en el citado ordenamiento legal no existe una disposición que literalmente establezca algún medio de impugnación para combatir lo ocurrido en dicha sesión, es cierto también que con fundamento en el artículo 303 de esa legislación se debe concluir que el medio de impugnación idóneo para hacer valer violaciones sucedidas durante esa sesión de cómputo es el juicio de inconformidad. En efecto, se llega a la conclusión de que este juicio es el procedente en contra del acta de cómputo municipal, pues al analizar el artículo 303 del ordenamiento electoral de referencia, en el cual se enumeran los medios impugnativos que pueden ser interpuestos durante el proceso electoral, se llega a la convicción de que el recurso de revisión no sería el idóneo pues el mismo tiene naturaleza administrativa al ser resuelto por la propia institución responsable; que el de apelación procede en contra de lo resuelto en relación con el recurso de revisión, lo que lo hace también un medio no idóneo para el efecto de que se trata. En consecuencia, estos dos recursos no serían procedentes; por lo tanto, si no existe otro medio impugnativo previsto en la legislación electoral local, sólo queda, por exclusión, el juicio de inconformidad como el medio idóneo para impugnar las posibles violaciones ocurridas durante el cómputo municipal, distrital o estatal, según la elección de que se trate”.

Aunado a lo expuesto, debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, la demanda del juicio de inconformidad deberá presentarse dentro de los cinco días contados a partir del siguiente de que concluya el cómputo

respectivo; en el caso, como ya quedó acotado, la sesión de cómputo reclamada, concluyó a las **tres horas con cero minutos del once** de junio de dos mil quince, por consiguiente el plazo referido empezó a correr a partir del **doce** y fenecía el **dieciséis**, ambos de junio de este año, en tanto que el juicio de inconformidad se presentó ante la autoridad responsable a las **veintidós horas con cuarenta y cinco minutos del quince** de junio siguiente, esto es, dentro del término previsto por la ley instrumental electoral para tal efecto, de ahí que no sea dable estimar, que el hoy inconforme consintió expresa ni tácitamente los actos aquí impugnados, por ende, es infundado el argumento.

Ante tal situación, es evidente que en el presente asunto, no se surte la hipótesis prevista en la fracción III, del artículo 11, de la Ley Adjetiva Electoral, y por tanto, se desestima la causal de improcedencia invocada.

Por otra parte, el aludido tercero interesado, también invoca la diversa causal de improcedencia prevista por la fracción VII, del artículo 11, de la Ley Adjetiva Electoral, que dice:

“...

VII. *Cuando resulte evidentemente frívolo o sea notoriamente improcedente;*

...”

Al efecto, el promovente afirma que la parte actora actúa con frivolidad, al estar demostrado que consintió el acto reclamado, sin embargo, como ya quedó acotado en párrafos precedentes, dicho consentimiento no quedó justificado.

En cuanto al señalamiento relativo a que, del juicio de inconformidad no se desprende hecho en que el demandante apoye su pretensión; lo cual hace preciso acotar, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 33/2002, consultable en las páginas 364 a 366, del volumen 1, compilación 1997-2013, de rubro: **“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.”**, se pronunció en el sentido de que el medio de impugnación podrá estimarse frívolo, cuando carezca de materia o se centre en cuestiones irrelevantes, es decir, sin fondo y substancia.

De lo anterior, se desprende que la frivolidad en los medios de impugnación en materia electoral local se actualiza cuando:

1. Se promueva respecto de hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba.

2. No se pueda actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente el medio de impugnación y por tanto, los hechos no constituyan violación a la normativa electoral.

3. Las pretensiones formuladas no se puedan alcanzar jurídicamente por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho.

4. Se haga referencia a hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad.

5. Únicamente se funden en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.

Con base en ello, y contrario a lo expuesto por el tercero interesado este Tribunal estima que no le asiste la razón, porque del análisis del medio de impugnación que nos ocupa se aprecia, que el actor expone consideraciones en las que pretende sustentar la reclamación de la elección de Gobernador derivada de los resultados consignados en el acta de sesión de cómputo señalada como acto reclamado, así como, ofrece medios de convicción que estimó idóneos y suficientes para acreditar su dicho; de ahí que se concluya que no se satisface la frivolidad en el caso concreto, motivo por el cual se desestima **la referida causal de improcedencia.**

Esto, con independencia de los argumentos que hace valer dicho tercero, relativos a que, el promovente pretende anular la elección de gobernador, impugnando la validez de la elección de gobernador por parte del Consejo Distrital, cuando la única autoridad para validarla es este órgano jurisdiccional, cuando además, el resultado final de la elección no admite la nulidad por los simples señalamientos relacionados con el rebase de topes de campaña, porque estos tópicos en todo caso constituyen materia de análisis del fondo del asunto que en párrafos subsecuentes lleve a cabo este Tribunal.

CUARTO. Requisitos del medio de impugnación y presupuestos procesales.

1. Forma. Los requisitos formales, previstos en los artículos 240 del Código Electoral del Estado y 10 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, se encuentran satisfechos, ya que el medio de impugnación se presentó por escrito ante la autoridad responsable; consta el nombre y firma del promovente y el carácter con que se ostenta; señaló domicilio para recibir notificaciones; se identifican tanto el acto impugnado como la autoridad responsable; se mencionan los hechos en los que se basa la impugnación y los preceptos presuntamente violados y ofrece pruebas.

2. Oportunidad. La demanda del juicio de inconformidad, en la que se reclama, como ya se dijo, los actos consistentes en la elección de Gobernador dentro del **Distrito 10, Morelia Noroeste**, con sede en **esta ciudad**, se presentó dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente a que concluyó el cómputo distrital reclamado, como lo establece el artículo 60 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, esto, porque la sesión de cómputo distrital de la elección de Gobernador en aquél municipio, concluyó a las **tres** horas del **once** de junio del año en curso, como consta de la copia certificada de la actuación respectiva -fojas **102 a 107-**, probanza que tiene la calidad de documento público con valor probatorio pleno a la luz de los artículos 17, fracción IV, y 22, fracción II, de la ley adjetiva de la materia, en tanto que, del aviso de presentación rubricado por el Secretario del Comité Distrital Electoral en comentario, consta que el recurso

de inconformidad se presentó a las **veintidós** horas con **cuarenta y cinco** minutos del **quince** de junio del año en curso, esto es, dentro del plazo concedido al efecto.

3. Legitimación y personería. El juicio de inconformidad es planteado por parte legítima, conforme a lo previsto por el artículo 59, de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, ya que lo promueve el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante **suplente** ante el Consejo Distrital Electoral **Morelia Noroeste**, acreditada ante el órgano electoral responsable, como consta en el informe circunstanciado rendido por dicha autoridad, y que dada su naturaleza jurídica y al no haber sido desvirtuado con ninguna prueba de la misma especie, merece valor probatorio pleno en términos de los artículos 16, fracción I, 17, fracción II, y 22, fracción II, de la legislación en cita.

4. Definitividad. Se cumple este requisito de procedibilidad, toda vez que el acto impugnado no se encuentra comprendido dentro de los previstos para ser combatidos a través de los recursos de revisión o apelación, por lo que no admite medio de defensa alguno que deba ser agotado previamente a la presentación del Juicio de Inconformidad, por virtud del cual pueda ser modificado o revocado.

5. Especiales. Los requisitos especiales del escrito de demanda establecidos en el artículo 57 Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, también se satisfacen, toda vez que

se indica la elección que se impugna, esto es, la Gubernatura de esta entidad federativa.

QUINTO. Agravios. Este tribunal estima innecesario en el caso realizar la reproducción de los motivos de disenso esgrimidos por la actora, en términos de los siguientes argumentos:

El artículo 4º, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: “...***Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar...***”.

De dicho dispositivo, se sigue que es obligación de todo órgano de Estado, como este Tribunal Electoral, respetar el medio ambiente y, es de conocimiento común que las sentencias se redactan en papel, cuyo material de confeccionamiento es la celulosa², proveniente de las plantas, mismas que producen oxígeno, de orden vital para todos los seres vivos, por tanto, mientras más papel se dispendie, menor posibilidad de vida. Con ello se evidencia que a mayor gasto de papel, menor cuidado al medio ambiente, lo cual pugna con el contenido del referido precepto Constitucional.

De ello se colige que los tribunales, para la redacción y engrose de sentencias, deben observar el principio Constitucional de respeto al medio ambiente, debiendo redactar el documento con la menor cantidad de papel que sea indispensable, para evitar el daño ecológico.

² **Celulosa.** (Del lat. *cellúla*, hueco). f. *Quím.* Polisacárido que forma la pared de las células vegetales. Es el componente fundamental del papel. **II ~ nítrica.** f. *Quím.* La que sirve para formar el colodión.

Además, un principio contenido en el artículo 1º de la Constitución, es la interpretación *pro homine*³ de la Constitución, el cual, en concordancia con el precepto 17 de la propia Carta Magna, nos conduce a la conclusión de que las sentencias deben redactarse en lenguaje claro, concreto y preciso, pues la misma debe ser entendida por el particular justiciable que recibe el fallo, debiendo evitarse las argumentaciones innecesarias, salvo en el supuesto de ser indispensables para la correcta solución de la controversia.

El citado precepto constitucional, contiene el principio de justicia pronta, el cual manda que las resoluciones de los tribunales deben dictarse de forma ágil; en estas condiciones, dicho precepto legal, contiene de forma implícita el principio de economía procesal, el cual preconiza el ahorro de tiempo, materiales y esfuerzo del tribunal *-economía de tiempo y esfuerzo del resolutor y de los auxiliares-* y, al respetar dicho principio, entendido a la redacción y emisión de las sentencias, las mismas pueden ser emitidas en menor plazo, reduciendo materia prima y desempeño humano, ya que, incluso, se evitan repeticiones innecesarias que además obran ya en el expediente, así como las erogaciones económicas por el gasto de papel, luz y demás implementos necesarios para desplegar la labor jurisdiccional, lo que además impacta en beneficio de la hacienda pública.

³ El principio *pro homine*, incorporado en múltiples tratados internacionales, es un criterio hermenéutico que coincide con el rasgo fundamental de los derechos humanos, por virtud del cual debe estarse siempre a favor del hombre e implica que debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Octubre de 2004, I.4o.A.441 A, Página: 2385.

Máxime, que el contenido de los escritos y constancias de autos es del conocimiento pleno de las partes en contienda: de la quejosa por provenir de su intención los agravios, así como de la autoridad demandada y de las demás partes por habérseles dado a conocer.

De manera que el obviar su transcripción en este apartado no transgrede los principios de congruencia y exhaustividad que deben regir en el dictado de las sentencias, ni afecta a las partes contendientes; estos se encuentran satisfechos cuando el tribunal precisa los planteamientos esbozados en la demanda, los estudia y da una respuesta acorde, como quedará definido en el considerando siguiente; además, el artículo 32 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana, tampoco impone esa obligación.

Por analogía se invoca la jurisprudencia 2ª.J.58/2010, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, que dice:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. *De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da*

respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”

Ahora, como ya quedó acotado en apartados anteriores, el acto reclamado que procede analizar por el tribunal electoral, es el consistente en la elección de Gobernador contra los resultados consignados en las actas de cómputo distrital correspondiente al **Distrito 10 Morelia Noroeste**, con sede en **esta ciudad**, cuyos agravios se sintetizan en los términos siguientes:

A) El actor, en el primer agravio aduce, que los actos reclamados son violatorios de los artículos 1, 41, base VI, y 116, fracción IV, inciso I), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución del Estado; 4, inciso c), 9, 10, 55 y 65, de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, porque, a su decir, no se observaron los elementos fundamentales de una elección democrática, tales como las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo, así como la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, pues en su concepto ningún acto de autoridad electoral puede estar por encima de tales principio, cuyo cumplimiento es imprescindible para que la elección de

Gobernador del Estado se considere producto del ejercicio popular de la soberanía y agrega.

B) De igual manera, en el segundo de los agravios invoca como causas de nulidad de los resultados del cómputo distrital en cuanto a la elección de Gobernador del Estado dentro del Distrito Electoral **10 Morelia Noroeste**, con sede en **esta ciudad**, previstas en las fracciones IX y XI, del precepto legal 69 de la ley instrumental del ramo.

C) Que a fin de no violentar el derecho del partido quejoso, este órgano jurisdiccional debe tomar en cuenta las actas distritales para el cómputo, y advertir que los comités distritales evidencian su desinterés de hacer un análisis profesional, imparcial y apegado a principios de derecho, pasando por alto las violaciones cometidas a la norma constitucional, porque el acto combatido trasgrede los principios rectores de la materia que nos ocupa, lesionando el principio de equidad en el proceso electoral ordinario local, con lo cual se afectó el resultado definitivo de la votación.

D) En el último agravio refiere, medularmente, que en perjuicio del instituto político denunciante, se violan los artículos 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37 y 38, relativos y aplicables del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, porque afirma, el candidato del Partido de la Revolución Democrática a la Gubernatura de esta entidad federativa, *“se ha excedido en el tope de gastos de campaña, y antes de la conclusión de la campaña, lo cual genera ventaja y violenta el principio de equidad en la contienda, dado que generó un dispendio a todas luces superior a lo autorizado como tope*

*de gasto de campaña por la cantidad de \$45,449,852.99 (Cuarenta y cinco millones cuatrocientos **cuarenta** y nueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos 99/100 M.N.), los siguientes gastos que para efectos del cálculo los dividiremos en los siguientes rubros, (Espectaculares luminosos, lonas espectaculares), MICROPERFORADOS y CALCOMANÍAS, BARDAS (Pinta de Bardas de Diferentes Medidas y en Diferentes Comunidades), UTILITARIOS (Playeras impresas de Color Blanco y Color Amarillo, Gorras Impresas y Bordadas, Pulseras RENTA DE CASA DE CAMPAÑA, GASOLINA Y PAGO A PERSONAL DE PROMOCIÓN DEL VOTO y OPERATIVO DE LA CAMPAÑA, LONAS, ETC. De la suma aritmética se desprende que el candidato del PRD ha erogado una cantidad excesiva e ilimitada de gastos de campaña” (sic).*

E) Asimismo, en el tercer motivo de disenso el inconforme realiza diversas manifestaciones relacionadas con la expedición del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, mediante el cual se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Decreto número 316, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán, a través del que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Estatal; expedición de los acuerdos CG-201/2011, del entonces Instituto Federal Electoral; CG-01/2014, CG-08/2014; INE/CG-45/2014, INE/CG-93/2014, INE/CG-263/2014 y su modificación a través del diverso INE/CG-350/2014, INE/CG-13/2015 y su rectificación mediante semejante INE-CG-81/2015; aprobación del Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; IEM-CG-40/2014, CG-50/2014, y el acta número IEM-CG-SEXTRAORD-13/2014, que decretó el Calendario Electoral para el proceso Electoral Ordinario 2014-2015, del Instituto Electoral de Michoacán, así como expresiones tocantes al desarrollo y aprobación del Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución de las irregularidades encontradas y una supuesta sanción impuesta al Partido de la Revolución Democrática, consistente en una amonestación pública.

SEXTO. Estudio de fondo. Por cuestión de método, en el caso, el estudio de los agravios se iniciará con el primero de los resumidos en el apartado que antecede, para continuar con el penúltimo, enseguida, el segundo y tercero, y al último el quinto, aspecto que en modo alguno causa perjuicio a las partes en litigio, porque lo que interesa, es que sean analizados todos y cada uno de ellos.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 4/2000, visible en la página 4, de la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, que dice:

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados”.

El promovente, en su primer motivo de disenso, como ya quedó evidenciado, expone de manera genérica, que la

autoridad responsable, no observó los elementos fundamentales de una elección democrática, esto es, la libertad, autenticidad, periodicidad de las elecciones, como tampoco, lo relativo a que el sufragio es universal, libre, secreto y directo; consideraciones que evidentemente, constituyen señalamientos globales, pues mediante ellos atribuye violaciones al Consejo **Distrital 10 de Morelia Noroeste**, con sede en **esta ciudad**, empero, omite precisar en qué consisten dichas violaciones, esto es, a través de qué actos la responsable violentó o inobservó los principios fundamentales invocados; cuestiones por las que su punto de desacuerdo deriva inoperante.

Lo anterior se considera de este modo, porque en la especie, para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de analizar si el proceder de la responsable fue violatorio o no de los principios fundamentales enunciados por el actor, no es suficiente que dichas violaciones se señalen de manera general, sino que, era necesario exponer qué fue lo que ocasionó esa vulneración y si con dicho proceder se violentaron todos y cada uno de los mismos, es decir, que tales argumentos estuvieran sustentados en bases sólidas y congruentes; pues es a la luz de éstos como se puede abordar su análisis, en otras palabras, que el promovente, en sus planteamientos expusiera el o los hechos que considerara violatorios del principio o precepto constitucional; que se comprobara plenamente el hecho señalado como violatorio de algún contenido constitucional; la comprobación de haberse producido una grave afectación como resultado de la violación al principio o precepto constitucional dentro de la elección y la determinancia de la violación de principio o

preceptos constitucionales, como así lo determinó la Sala Regional de la V Circunscripción Plurinominal con residencia en Toluca, Estado de México, en la ejecutoria emitida el veintiocho de diciembre de dos mil once, en el expediente identificado con la clave ST-JRC-117/2011; aspectos que en la especie, no se cumplen, por las razones asentadas en párrafos atrás.

Mayormente, porque no debe perderse de vista que al actor corresponde expresar la causa de pedir, lo que como ya se vio, en el caso no sucede; de ahí lo inoperante de su agravio.

Corroborando lo expuesto, la jurisprudencia 3/2000, visible en la página 5, de la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, del tenor siguiente:

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. *En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos*

aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”.

En cuanto a los puntos de desacuerdo expuestos por el demandante e identificados con los incisos b) y c), del resumen que antecede, son inoperantes, por las consideraciones siguientes:

Las fracciones IX y XI del artículo 69 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, disponen:

“Artículo 69. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualquiera de las causales siguientes:

...

IX. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación;

...

XI. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma”.

La interpretación gramatical de dichas hipótesis legales, nos lleva a la consideración, de que para actualizarse tales causales de nulidad es necesario demostrar, la violencia física o presión ejercida sobre miembros de la mesa directiva o sobre los electores, así como, las irregularidades que se tildan como graves, demostradas e irreparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que lleguen a rebatirse, y que pongan en duda la certeza de la

votación y se consideren determinantes para el resultado de la misma.

Por su parte, el normativo 57, fracción II, de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana vigente en esta entidad federativa, indica:

“Artículo 57. Además de los requisitos establecidos en el artículo 9 del presente Ordenamiento (sic), el escrito por el cual se promueva el juicio de inconformidad deberá cumplir con los siguientes:

...

I. La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite anular en cada caso y la causal que se invoca para cada una de ellas;

...”

Del precepto copiado, se desprende, que el juicio de inconformidad, además de reunir los requisitos genéricos para todos los medios de impugnación exigidos por el numeral 10, de la ley en cita, deben satisfacerse los especiales, como el indicado, esto es, la mención individualizada de las casillas cuya votación se pida anular y la causal que se invoque para cada una de ellas.

En la especie, el promovente en los motivos de disenso a analizar, reclama la nulidad de la elección de Gobernador dentro del Distrito Electoral 10 Morelia Noroeste, con sede en esta ciudad, porque afirma, se actualizan las causales previstas en el artículo 69, fracción IX y XI, de la ley instrumental electoral; relativas, por su orden, a ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y, existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente

pongan en duda la certeza de la votación y que ambas causas sean determinantes para el resultado de la votación.

Sin embargo, del contenido literal de los agravios expuestos antes resumidos, en la parte final del considerando precedente, se advierte que el actor no satisface el preinserto requisito de procedibilidad del juicio que nos ocupa, esto es, el especial relativo a mencionar en la demanda, en forma individualizada, las casillas que se pretendan anular y las causas que se invoquen contra cada una de ellas; ya que de manera generalizada señala, como acto reclamado, los resultados del cómputo distrital de la elección de Gobernador dentro del Distrito Electoral **10 Morelia Noroeste**, sin indicar de manera individual las casillas que conforman dicho distrito mucho menos puntualiza respecto de cuáles pide la anulación, aunado a que omitió referir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos o irregularidades que en concepto del partido político denunciante actualizan aquellas causas de nulidad, cuya señalización hizo igualmente en términos generales, sin poner en evidencia la forma en que afectaron el resultado de la elección.

Luego, si a la luz del marco normativo anotado, para la procedencia del estudio de las causales de nulidad invocadas por el actor, era necesario que señalara en qué consisten las violaciones graves que, a su decir, conllevan a la anulación de la elección de Gobernador dentro del distrito electoral referido, lo que no hizo, pues se reitera, el partido denunciante, faltó a la individualización de casillas cuya nulidad demandó, a la expresión de razonamientos relacionados con las causales de nulidad que hace valer, es

decir, las circunstancias en torno al desarrollo de la jornada electoral y con base en los que pide la nulidad de la elección, puesto que, no basta que de manera global indique que la elección reclamada, esto es, para Gobernador en el distrito electoral 10 Morelia Noroeste, con sede en **esta ciudad**, está afectada de nulidad, sino que como ya se dijo, tenía el deber de precisar de manera clara y precisa las casillas cuya votación se solicite anular y las causas en que sustente su pretensión.

Así pues, si el promovente no cumple con las exigencias en alusión, es incuestionable que sus motivos de disenso derivan inoperantes, sin que en el caso, sea procedente suplir su deficiencia en términos del artículo 33 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, pues este órgano jurisdiccional no está constreñido a realizar el estudio oficioso alguno sobre las causas de nulidad invocadas por el actor, si en la demanda no expone, como ya se vio, elementos mínimos que permitieran deducir claramente las causas en que basó la reclamación de nulidad.

Tiene aplicación al respecto, la tesis CXXXVIII/2002, publicada en las páginas 203 y 204, de la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación, Suplemento 6, Año 2003, que dice:

“SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. El órgano jurisdiccional no está constreñido legalmente a realizar estudio oficioso alguno sobre causas de nulidad que no fueron invocadas por el actor, en atención a una pretendida suplencia de la queja o causa de pedir, pues tal como

se establece en el artículo 52, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es un requisito especial del escrito de demanda mencionar, en forma individualizada, las casillas que se pretendan anular y las causas que se invoquen en cada una de ellas; por lo que, si el actor omite señalar en su escrito de demanda de inconformidad, las causas de nulidad de la votación establecidas en el artículo 75 de la citada ley general, tal omisión no puede ser estudiada ex officio por la autoridad que conoce del juicio de inconformidad, puesto que tal situación no sería una suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel de promovente, cosa totalmente ilegal, a menos que de los hechos expuestos en la demanda se puedan deducir agravios, que pongan de manifiesto la actualización de una causa de nulidad de la votación, en términos de lo dispuesto en el artículo 23 párrafo 1, de la ley adjetiva citada”.

Por otra parte, en el penúltimo de los agravios expuestos por el disidente, el cual se resumió en el inciso d), que obra en la parte final del considerando quinto de esta sentencia, en el que alude, en forma sustancial, al exceso en el tope de gastos de campaña y antes de su conclusión, a partir de que afirma, lo autorizado como tope de gasto de campaña fue por \$45,449,852.99 (cuarenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos 99/100 M.N.), esto, con motivo del gasto en los rubros genéricos que señala.

Motivo de inconformidad que este órgano jurisdiccional declara inatendible, primero, porque sus expresiones las formula de manera general y, segundo, los aspectos combatidos en el mismo, están supeditados a la resolución que se llegue a emitir en el diverso juicio de inconformidad identificado con la clave TEEM-JIN-133/2015, del índice de este tribunal electoral, y que actualmente se sustancia ante la ponencia del Magistrado Rubén Herrera Rodríguez, el cual

fue promovido por el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en el que impugna fundamentalmente, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital y estatal en la elección de Gobernador, en consecuencia, el otorgamiento de la constancia de mayoría, violación a principios constitucionales ocurridos durante el proceso electoral y la nulidad de la elección, por el rebase de tope de gastos de campaña, atribuida a Silvano Aureoles Conejo en cuanto candidato común por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Nueva Alianza.

Se considera de este modo, porque dentro de dicho procedimiento, el magistrado ponente, en su caso, estará en aptitud de abordar el estudio relativo a si Silvano Aureoles Conejo, en cuanto candidato común a Gobernador del Estado por los institutos políticos aducidos, excedió el tope máximo de campaña aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en el acuerdo CG-20/2014, denominado *“Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, sobre la aprobación de topes máximos de campaña, para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos, a realizarse el siete de junio del año 2015 (CG-20/2014)”*, en donde se estableció el tope máximo de gastos, por cada una de las campañas electorales para renovar, entre otros, el Poder Ejecutivo.

Lo que hace inconcuso, que en el presente litigio, no sea dable legalmente atender esos puntos de desacuerdo, dado que, la reclamación relacionada, específicamente, con el rebase de tope de gastos, no es susceptible de dividirse por distrito electoral, cuando la elección impugnada es estatal.

Finalmente, los motivos de inconformidad hechos valer por la parte actora e identificados con el inciso E), resultan **inoperantes**.

Se dice así, porque con las manifestaciones realizadas no combate las consideraciones torales contenidas en los actos reclamados, es decir, el acta circunstanciada de la sesión de cómputo municipal, ni la pormenorizada del conteo, sellado y enfajillado de boletas electorales, los resultados, o bien, la declaración de validez de la elección de Gobernador que en este juicio impugnó y que sirvieron de base para la emisión de los mismos, pero aparte, tampoco dice cómo impactan dichas afirmaciones en el sentido de los actos respecto de los que aquí se inconforma, más aún, si se toma en cuenta que ya se precisó en párrafos atrás que para abordar el estudio respecto de las inconformidades hechas, se requería de que tales argumentos estuvieran sustentados en bases sólidas y congruentes; pues es a la luz de éstos como se puede abordar su análisis, es decir, que en sus planteamientos explicara los hechos que considerara violatorios de algún contenido constitucional, o bien, la demostración de haberse producido una grave afectación dentro de la elección y la determinancia de la violación.

Sirve de apoyo a lo anterior en vía de orientación, la jurisprudencia 1ª./J. 19/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 731, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

“AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. *Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo”.*

En las relatadas condiciones, ante lo inoperante e inatendible de los motivos de inconformidad, lo procedente es confirmar los resultados del cómputo distrital de la elección de Gobernador dentro del Distrito Electoral 10 Morelia Noroeste, con sede en esta ciudad.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E :

PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de inconformidad, promovido por el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, respecto de los actos precisados en el considerando segundo de esta resolución, por las razones ahí expuestas.

SEGUNDO. En cuanto al acto reclamado, relacionado con el exceso en el tope de gastos de campaña, por las consideraciones plasmadas en la parte final del considerando sexto, son inatendibles en este medio de impugnación.

TERCERO. Se confirman los resultados de la elección de Gobernador dentro del Distrito Electoral 10 Morelia, Noroeste, con sede en Morelia, Michoacán.

Notifíquese; personalmente al actor y al tercero interesado; **por oficio** a la autoridad responsable, por conducto del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Michoacán, acompañando copia certificada de la presente sentencia; **y por estrados**, a los demás interesados; lo anterior, con fundamento en los artículos 37, fracciones III, IV y V; 38; y 39 de la Ley de Justicia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo; y 72 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, a las diecinueve horas veinte minutos del día de hoy, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados Rubén Herrera Rodríguez, Ignacio Hurtado Gómez, Alejandro Rodríguez Santoyo y Omero Valdovinos Mercado, quien fue ponente, con excepción del Magistrado Presidente José René Olivos Campos, al haberse excusado del conocimiento del asunto; todos integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, ante la

Licenciada Ana María Vargas Vélez, Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe. Conste.

MAGISTRADO

MAGISTRADO

(Rúbrica)

(Rúbrica)

**RUBÉN HERRERA
RODRÍGUEZ**

**IGNACIO HURTADO
GÓMEZ**

MAGISTRADO

MAGISTRADO

(Rúbrica)

(Rúbrica)

**ALEJANDRO RODRÍGUEZ
SANTOYO**

**OMERO VALDOVINOS
MERCADO**

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

(Rúbrica)

ANA MARÍA VARGAS VÉLEZ.

La suscrita Licenciada Ana María Vargas Vélez, Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 69, fracción VII y VIII del Código Electoral del Estado; 9, fracción I y II del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, hago constar que las firmas que aparecen en la presente página, corresponden a la sentencia emitida, por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en sesión pública celebrada el cinco de agosto de dos mil quince, dentro del Juicio de Inconformidad identificado con la clave **TEEM-JIN-74/2015**; la cual consta de cincuenta y siete páginas, incluida la presente. **Conste.**